

**REPUBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL  
JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD  
Bogotá, D.C., noviembre veinticuatro (24) de dos mil veinte  
(2020)**

**REF. ACCIÓN DE TUTELA No.2020-0729 promovida por el señor JUAN DAVID HERNANDEZ MARIÑO en contra de BANCO CAJA SOCIAL, SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BARRANQUILLA, ALCALDIA DE BARRANQUILLA.**

**ANTECEDENTES**

**1º.- Petición.-**

El señor JUAN DAVID HERNANDEZ MARIÑO ejercita la acción de tutela en nombre propio en contra del BANCO CAJA SOCIAL, SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BARRANQUILLA y ALCALDIA DE BARRANQUILLA, con el fin de que se le tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, al buen nombre, a la rectificación, de petición, al trabajo, al debido proceso, a la defensa, a una vivienda digna, a la presunción de buena fe, al acceso a la administración de justicia.

En consecuencia, solicita se ordene el retiro de los reportes negativos ante centrales de riesgo.

**2º.- Hechos.-**

Refiere el tutelante en síntesis que se permite efectuar el Despacho, que aparece un reporte negativo en las bases de datos del Banco Caja Social, de la Secretaria de Movilidad de Barranquilla y de la Alcaldía de Barranquilla.

Relata que ha suscrito obligaciones contractuales con entidades financieras bancarias y comerciales.

Comenta que invoca la presente acción de tutela, por infracciones de tránsito que ya fueron canceladas, pero no han cumplido con la obligación legal de que trata el art.20 de la C.N.

Narra que elevó derecho de petición ante las entidades accionadas y no ha sido posible que cumplan con su obligación legal.

Informa que nunca se le dio la oportunidad de ejercer su defensa, como es la notificación previa, debiendo existir constancia de notificación y cumplir con el tiempo mínimo de 20 días.

Alega elevó petición, contestada en el mes de octubre de 2020, pero que las entidades accionadas persisten en mantener los reportes negativos, aduciendo que tienen pruebas para seguir manteniendo registros fraudulentos en su contra.

**3º.- Trámite.-**

Corresponde por reparto conocer a este Despacho de la presente acción de tutela, motivo por el cual mediante proveído de fecha noviembre dieciocho (18) del año en curso se admite a trámite la acción y se vinculó oficiosamente TRANSUNION, CIFIN, DATA CREDITO, EXPERIAN, COMPUTEC S.A. y CIFIN ASOBANCARIA.

Notificación efectuada a los entes accionados a través de correos electrónicos enviados el día jueves 19 de noviembre de 2020.

COMPUTEC S.A.S informa que esa entidad no es ni ha sido propietaria u operadora de ninguna base de datos relacionada con centrales de riesgo, por tanto solicita su desvinculación.

Señala que esa entidad nunca violó ningún derecho fundamental al accionante, que no es el responsable por los hechos relacionados, por lo anterior se debe declarar la improcedencia de la acción de tutela con respecto a ese ente.

CIFIN - TRANSUNION manifiesta que esa entidad no hace parte de la relación contractual que existe entre la fuente y el titular de la información.

Informa que el operador de información no es el responsable del dato que le es reportado por las fuentes de la información, que igualmente NO hay dato negativo en el reporte censurado por el accionante.

Hace saber que el operador no puede modificar, actualizar, rectificar y/o eliminar la información reportada por las fuentes, salvo que sea requerido por esta.

Informa que la petición que se menciona en la tutela no fue presentada ante esa entidad.

Denota que según la consulta del reporte de información financiera, comercial, crediticia y de servicios, revisada el 19 del mes y año en curso, a nombre del accionante frente a las entidades accionadas, no tiene reportes negativos.

Comenta que referente a las cuentas bancarias contraídas con la fuente BANCO CAJA SOCIAL hoy BCSC a nombre del accionante, se evidencia una cuenta de ahorro individual en estado inactiva embargada, aclarando que el embargo de una cuenta bancaria no es un dato negativo.

Solicita su exoneración y desvinculación en la presente acción de tutela.

La ALCALDIA DE BARRANQUILLA - SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BARRANQUILLA - SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, informa que el accionante interpuso derechos de petición el 6 de noviembre de 2020, dando respuesta de fondo el 23 del mismo mes y año, enviada al correo electrónico aportado por el actor.

Pone de presente que la respuesta otorgada resuelve de fondo la problemática planteada por el accionante, haciéndole entrega de una resolución de fecha 12/11/2020, por medio del cual se ordena el desembargo de unas sumas de dinero.

Indica que por la pandemia del COVID-19 una de las medidas de urgencia tomadas por el Gobierno Nacional, fue la ampliación del término para responder derechos de petición, por tanto ese organismo de tránsito aún

se encontraba dentro de los términos legales para dar respuesta a la petición presentada por el accionante.

Solicita denegar la presente acción por improcedente, por hecho superado, teniendo en cuenta que no han vulnerado derecho fundamental alguno al accionante.

Cabe aclarar que en los legajos aportados, se observa la respuesta al derecho de petición instaurado por el accionante, así como el oficio dirigido al BANCO CAJA SOCIAL, con fecha 23 de noviembre de 2020, mediante el cual le comunican la orden de desembargo de los dineros del cliente.

El BANCO CAJA SOCIAL, contestó que esa entidad recibió un oficio de embargo emitido por la Secretaria Distrital de Movilidad – Alcaldía de Barranquilla dentro de un proceso coactivo en contra del aquí accionante.

Comenta que al validar su vinculación con el cliente, encontraron una cuenta de ahorros, cobijada con el beneficio de inembargabilidad, por tanto la misma no fue afectada por la medida cautelar.

Refiere que posteriormente hallaron otra cuenta, la cual no goza de dicho beneficio, por lo cual ese banco en su calidad de mero ejecutor de una orden de embargo proferida por autoridad competente, procedió a embargar el valor completo de la medida.

Que sin embargo, el banco no ha realizado depósitos judiciales a favor del proceso y en tal sentido, los recursos del cliente no se han afectado, que la restricción se mantiene hasta que reciban el oficio de desembargo.

Alega que esa entidad no ha recibido derechos de petición por parte del accionante.

Que frente al reporte mencionado por el accionante, aclaran que el único realizado por el banco ha sido sobre el estado actual y real de sus cuentas, que para el caso corresponde a embargada, ello en virtud de la autorización dada por el cliente al momento de la suscripción del formulario de productos.

Solicita su desvinculación del presente trámite.

EXPERIAN COLOMBIA - DATACREDITO indica que el dato negativo objeto de reclamo no consta en el reporte financiero del accionante.

Informa que los operadores de información no son las entidades llamadas a comunicar de forma previa a los titulares sobre el registro de un dato negativo en su historia de crédito.

En consecuencia, solicita su desvinculación.

### **CONSIDERACIONES**

Se relievra en primer término que la ACCION DE TUTELA tiene como finalidad obtener la protección inmediata de los DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES como claramente lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Nacional. Los derechos que esgrimen los peticionarios como conculcados indiscutiblemente tienen tal rango y por ende son susceptibles de amparo por esta vía, siempre y cuando se den los demás requisitos previstos por el Constituyente de 1991 y por la Ley para el evento.

Planteado lo anterior, ha de circunscribirse este análisis en esta oportunidad al aspecto relativo a la procedibilidad de la presente ACCIÓN DE TUTELA en punto a la petición que versa sobre la presunta violación de tales derechos, pues solo de ser afirmativa la respuesta que se tenga al cuestionamiento que en tal sentido debe hacerse por parte de este Despacho, podrá entrarse a la trasgresión que alude la parte accionante.

Establece el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, al consagrar la ACCIÓN DE TUTELA, que ésta "... Solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". Norma que fue desarrollada por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1.991, que a la letra reza: "*Causales de improcedencia de la Tutela...:*

*Quando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.- La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficiencia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.-"*

## **DEBIDO PROCESO**

Al respecto del debido proceso la Sentencia No. T-576/92 dice:

*"El Derecho Fundamental al Debido Proceso Administrativo es un conjunto complejo de circunstancias de la administración que le impone la ley para su ordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados y para la validez de sus propias actuaciones. Dentro de aquellas circunstancias, se encuentran los medios, que el conocimiento jurídico denomina "RECURSOS", a disposición de los administrados para defenderse de los posibles desaciertos de la administración, bien sea irregularidad formal, injusticia o inconveniencia, hipótesis todas previstas en la ley, y que provocan con su uso la denominada "vía gubernativa", a fin de permitir a la Administración la corrección de sus propios actos mediante su modificación, aclaración o revocatoria, y, a los administrados la garantía de sus derechos por aquella, sin tener que acudir a la instancia judicial".*

*"La acción de tutela no procede cuando existan otros medios judiciales para hacer valer el derecho, sin perjuicio de que pueda ser utilizada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, oportunidad que no se da en el presente asunto por no ser el perjuicio de naturaleza irremediable. Sin embargo, el amparo que se hace del derecho al debido proceso asegura el amparo al también derecho fundamental al libre acceso a la justicia, que podría verse desconocido con la decisión administrativa, toda vez que la ley no libera expresamente a la administración de agotar la vía gubernativa".*

Así mismo y en relación con el debido proceso la Sentencia T-616/06 dice:

*"A la luz de las regulaciones de la Carta Fundamental (artículos 29 y 209), el debido proceso administrativo impone la publicidad como principio rector de las actuaciones administrativas (artículo 209 C.P. y 3º C.C.A.), de tal manera que la Administración resulta obligada a poner en conocimiento de sus destinatarios, todos*

*aquellos actos que supongan una afectación directa de su situación jurídica. En estos términos, la Carta Política exige que, cuando se trata de definir o derivar la responsabilidad de las personas que pueden ser sujetos de una sanción, la actuación correspondiente se surta respetando el principio de la publicidad. Es decir, las autoridades administrativas resultan obligadas a dar a conocer sus actuaciones mediante las "comunicaciones o notificaciones", que para el efecto plasme el ordenamiento jurídico (artículo 3º C.C.A)".*

Por otro lado, la sentencia T-647/03 señala la improcedencia de la tutela, cuando no existe una amenaza cierta y contundente:

*"De ésta manera, si no existe una razón objetivada, fundada y claramente establecida por la que se pueda inferir que los hechos u omisiones amenazan los derechos fundamentales del tutelante, no podrá concederse el amparo solicitado. La amenaza debe ser entonces, contundente, cierta, ostensible, inminente y clara, para que la protección judicial de manera preventiva evite la realización del daño futuro. De tal forma que la acción de tutela sólo será procedente cuando se origine en hechos ciertos y reconocidos, que permitan amparar la violación actual de un derecho indiscutible".*

Empero, la Sentencia T-010/08 reitera el concepto sobre la procedencia de la acción de tutela:

*"Ciertamente es que en varias oportunidades la Corte Constitucional ha concedido la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar perjuicio irremediable, pero en todos estos casos se ha tratado de personas que por una u otra razón se ven colocadas en situación de vulnerabilidad evidente. En relación con lo anterior, es preciso recordar que la Corte Constitucional ha sido insistente en afirmar que para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio es necesario demostrar que, en efecto, se trata de evitar un perjuicio irremediable. En esa línea de argumentación, ha dicho la Corte que se considera irremediable el perjuicio cuando "la lesión y amenaza de los derechos fundamentales invocados sea real, 'no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la posibilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada. La amenaza requiere de un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o moral'"*

En el mismo sentido la Sentencia T-532/08 ha dicho:

*"Desde muy temprana jurisprudencia la Corte Constitucional ha intentado precisar cuales son los requisitos que ha de reunir el otro medio de defensa judicial para que se le considere eficaz para la protección de los derechos fundamentales. Así, en la sentencia T-003 de 1992 sostuvo esta Corporación que el enunciado normativo del inciso tercero del artículo 86 constitucional debía interpretarse en el sentido que el otro medio de defensa judicial "(...) tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho.*

*Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho". Por otra parte, en la sentencia T-006 de 1992, se aseveró que correspondía al juez de tutela indagar si la "acción legal alternativa, de existir, es capaz de garantizar la protección inmediata de los derechos vulnerados o amenazados". En esa oportunidad la Corte acudió al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos para precisar las características que debía reunir el otro medio de defensa judicial para desplazar a la acción de tutela, y concluyó que éste debía ser sencillo, rápido y efectivo, de conformidad a lo previsto en dicho instrumento internacional.*

*Criterios que han sido reiterados en numerosos fallos posteriores. En definitiva, de la interpretación sistemática del artículo 86 de las Carta y del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, ha entendido esta Corporación, que han de existir instrumentos realmente idóneos para la protección de los derechos; cuando ello ocurre la persona debe acudir a la vía judicial ordinaria y no a la tutela, pues el carácter subsidiario de esta acción así lo exige. Contrario sensu, es posible que en virtud de circunstancias especiales el otro medio de defensa no se proyecte con la suficiente aptitud para salvaguardar los derechos de su titular, caso en el cual la tutela se erige como el instrumento válido de acción judicial"*

Igualmente la Sentencia T-192/09 se refiere a la relevancia constitucional del requisito general de subsidiariedad de la acción de tutela y al respecto dice:

*"El requisito de subsidiariedad de la acción de tutela responde al carácter expansivo de la protección de los derechos fundamentales respecto de las instituciones que conforman el aparato estatal y, de manera particular, las instancias que ejercen la función pública de administración de justicia. En efecto, la exigencia de este requisito, lejos de disminuir el ámbito de exigibilidad judicial de dichos derechos, presupone que los procedimientos judiciales ordinarios son los escenarios que, por excelencia, están diseñados para garantizar su efectividad, a través de órdenes con contenido coactivo. A su vez, la subsidiariedad es corolario del principio de supremacía constitucional, el cual no sólo es aplicable al ámbito de la producción legislativa, sino que informa la actividad estatal como un todo. En ese sentido, la exigibilidad de los derechos fundamentales no es un asunto radicado en la competencia de los jueces de tutela, sino que es un presupuesto para la legitimidad, desde la perspectiva constitucional, de la actuación de las autoridades públicas y de los particulares. Esto lleva a inferir que dentro del parámetro normativo para la decisión judicial, cualquiera que sea la instancia encargada de adoptarla, los postulados constitucionales determinan la validez de la aplicación de la normatividad de rango inferior. Por ende, el principio según el cual la Carta Política es "norma de normas" conlleva como consecuencia necesaria la constitucionalización de cada una de las jurisdicciones. Así, cada una de ellas tendrá como objetivo principal la preservación de la integridad del ordenamiento jurídico en su conjunto y, de manera especial, la vigencia de los postulados constitucionales".*

## **DERECHO DE PETICIÓN.**

Entre los derechos instituidos en la Constitución como fundamentales, según el artículo 23 ibídem, está el de petición, al decir dicha norma *"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución"*.

Si la norma transcrita habla de presentar peticiones y a obtener pronta resolución, es evidente que el derecho fundamental a que la misma hace alusión -petición-, se quebranta cuando la solicitud no es recibida, o cuando no se da respuesta oportuna; pues evidente que en uno y en otro sentido el interesado no puede obtener la información pretendida.

Desde luego y como lo ha dicho de manera reiterada la jurisprudencia, el derecho de petición no se viola cuando la respuesta es contraria a lo solicitado por el peticionario; lo que interesa es la contestación, o sea que haya pronunciamiento al respecto, la cual puede ser en forma adversa a lo pretendido.

En igual sentido habrá de recordarse que la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 reguló el derecho fundamental de petición y en uno de sus apartes establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente o por escrito, a través de cualquier medio.

De tal suerte que, se resolverán o contestarán las peticiones en el término de 15 días siguientes a la fecha de su recibo y cuando no fuere posible se informará al interesado, expresando los motivos de demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta.

La Corte Constitucional ha indicado sobre el tema:

*"Existe vulneración del núcleo esencial del derecho de petición, cuando la entidad correspondiente no emite una respuesta en un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a la noción de "pronta resolución", o, cuando la supuesta respuesta se limita a evadir la petición planteada, al no dar una solución de fondo al asunto sometido a su consideración" (Sentencia T-170 de 2000. M.P.: Alfredo Beltrán Sierra).*

El derecho de petición tal como fue concebido por el Constituyente, es de carácter público subjetivo de la persona, que la faculta para acudir ante las autoridades, o ante las organizaciones privadas que establezca la ley, con la finalidad de obtener pronta resolución a una queja o solicitud. Aunque su objeto no incluye el derecho a obtener resolución en determinado sentido, se exige que el pronunciamiento sea oportuno.

Al respecto ha manifestado la Honorable Corte Constitucional que:

*"Puede afirmarse que el derecho fundamental sería inocuo si sólo se formulara en términos de poder presentar la respectiva petición. Lo que hace efectivo el derecho es que la petición elevada sea resuelta rápidamente. De nada serviría el derecho de petición, si la misma Constitución no consagrara el relativo deber de las autoridades de proferir pronta resolución. Desde luego, no puede tomarse como parte del derecho de petición una prerrogativa que lleve forzosamente*

*a que la administración defina de manera favorable las pretensiones del solicitante.*

*Cuando se habla de "pronta resolución", quiere decir que el Estado está obligado a resolver la petición, y no simplemente a expedir constancias de que la recibió. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa. La obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla". (C. Cons., Sent. T-181, May 7 de 1993 M. P. Hernando Herrera Vergara).*

Por otra parte, la Sentencia T-143/00 dice cuando nos encontramos ante un perjuicio irremediable y al respecto señala:

*"La materialización de un perjuicio irremediable como elemento esencial para la procedencia excepcional de la acción, cuando existan vías judiciales distintas para la protección de los derechos, no se vislumbra en este caso, porque no se dan los elementos constitutivos de éste, es decir, la inminencia y gravedad del perjuicio y la urgencia e impostergabilidad de las medidas que deberían adoptarse para impedir su ocurrencia".*

*"Evidentemente, esta Corporación ha entendido como irremediable aquel daño que puede sufrir un bien de alta significación objetiva protegido por el orden jurídico, siempre y cuando sea inminente, grave, requiera la adopción de medidas urgentes y, por lo tanto, impostergables, y se trate de la afectación directa o indirecta de un derecho constitucional fundamental y no de otros como los subjetivos, personales, reales o de crédito y los económicos y sociales, para los que existen vías judiciales ordinarias."*

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la parte accionante no allegó prueba alguna que demuestre la radicación de derechos de petición ante las entidades accionadas.

Al respecto la Sentencia T-999/02 dice que: *"La acción de tutela prospera cuando el juez cuenta con la totalidad de los elementos de juicio que le permitan arribar a la conclusión de que en el caso específico se produjo en realidad el atropello del que se queja el solicitante. Los extremos fácticos en los cuales se funda la tutela del derecho de petición -que deben estar claramente demostrados son, de una parte la solicitud, con fecha cierta de presentación ante la autoridad a la cual se dirige, y de otra, el transcurso del tiempo señalado en la ley sin que la respuesta se haya comunicado al solicitante".*

Por lo tanto, es evidente que no existe violación al derecho de petición por cuanto con la acción de tutela no se adjuntó elemento probatorio que acredite el envío de dichas peticiones ante las empresas accionadas.

De otro lado la Sentencia T-010/98 manifiesta que:

*"La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las partes enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, debe*

*probar que respondió oportunamente. La prueba de la petición y de su fecha trasladada a la entidad demandada la carga procesal de demostrar, para defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue contestada, resolviendo de fondo y oportunamente. Pero si ante el juez no ha sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación constitucional de responder”.*

Si bien es cierto, el accionante no arrimó anexo alguno a la presente acción de tutela que acredite la radicación de un derecho de petición frente a la totalidad de la parte accionada, también lo es, que la ALCALDIA DE BARRANQUILLA – SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BARRANQUILLA - SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, hace saber que el peticionario efectivamente elevó una solicitud con data 6 de noviembre avante.

Sin embargo, habrá de recordarse que dada la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Presidente de la Republica impartió una serie de instrucciones, entre las cuales se encuentran las contempladas en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Así las cosas, el artículo quinto de éste Decreto, reza:

*“Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:*

*Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.*

*Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

*(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.*

*(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.*

*Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se*

*resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.*

*En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.*

*Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales."*

Se reitera que la acción de tutela ha sido instituida por el Constituyente como un mecanismo de defensa judicial al cual pueden acudir las personas cuando consideren vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales ya sea por la acción u omisión de una autoridad pública o por particulares, éstos en los precisos términos señalados en la ley. Por consiguiente, la persona que considere se le ha desconocido un derecho fundamental, puede acudir ante los jueces con el fin de obtener, a través de un procedimiento preferente y sumario, una orden destinada a que el infractor del ordenamiento constitucional actúe o se abstenga de hacerlo y así lograr el restablecimiento de sus derechos.

En esa medida, para que el juez de tutela ordene el amparo de los derechos fundamentales de una persona, se requiere demostrar o acreditar la amenaza o vulneración de estos. Por manera que si dentro del plenario no se revela ese desconocimiento, se impone la denegación de la tutela.

Dentro de este marco, antes de alegar la vulneración del derecho fundamental de petición debe haberse presentado la solicitud con el cumplimiento de los requisitos legales y poderse demostrar su recibo por parte de la autoridad correspondiente, en el trámite constitucional de tutela, situación ésta que no aconteció al interior del asunto sub lite.

En consecuencia, bajo éstas directrices es claro que frente a la única petición incoada por la parte accionante con fecha 6 de noviembre ante la ALCALDIA DE BARRANQUILLA – SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BARRANQUILLA - SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, no se ha violentado derecho fundamental alguno, dado que a la data de radicación de la acción de tutela, aún no había fenecido tanto el término inicial como su ampliación para obtener respuesta, conforme se estableció en el referido Decreto 491 de 2020.

No obstante, se observa que existe carencia actual de objeto, dado que la ALCALDIA DE BARRANQUILLA – SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BARRANQUILLA - SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, dio respuesta favorable a la petición incoada por el accionante, tema sobre el cual la Corte ha manifestado que en aquellos eventos en los cuales los hechos que originan la vulneración de derechos fundamentales desaparecen, la acción de tutela pierde su eficacia e inmediatez y, por ende su justificación constitucional.

Por lo tanto, en la Sentencia N° T-592 de Noviembre 05 de 1996, nuestro máximo Tribunal expuso sobre el hecho superado lo siguiente: "En repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto de improcedencia de la acción de tutela cuando la causa que genera la vulneración del derecho ya se encuentra superada, toda vez que, en estos casos, cualquier pronunciamiento que pudiera hacer al juez de tutela frente a la situación resultaría ineficaz, toda vez que la materia sobre la cual debería recaer su pronunciamiento, ya no existe".

De igual manera, ha de tenerse en cuenta que la Corte Constitucional ha manifestado de forma reiterada que acudir a la acción de tutela cuando existen mecanismos ordinarios de defensa, desconoce que los procedimientos administrativos y los procesos ante la administración de justicia son los primeros y más propicios escenarios para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. Por ello, un requisito de procedencia formal de la acción de tutela es que se hayan agotado todas las instancias y recursos en los cuales el afectado hubiera podido solicitar la protección del derecho amenazado o vulnerado.

En resumidas cuentas, este Despacho constata que la parte accionante no documentó haber instaurado petición alguna ante la totalidad de las entidades accionadas, **solicitando el retiro del reporte negativo al que hace referencia en los hechos y pretensiones de la tutela**, concluyéndose de ésta manera que acudió a ésta instancia judicial sin agotar los procedimientos legales que se encuentran previamente establecidos para dicho fin. Más aún, cuando no se acreditó que el medio o recurso existente carece de eficacia, como tampoco que la acción constitucional se hubiese instaurado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Conclúyase que el petente cuenta con otros mecanismos judiciales distintos al presente para reclamar sus derechos, lo que hace improcedente la presente acción de tutela, pues la misma está condicionada a la existencia de éstos, predicar cuestión distinta resultaría contrario al principio mínimo de justicia como ha señalado Nuestro Máximo Tribunal Constitucional, ya que si se partiera del supuesto de que la tutela procede siempre en cualquier relación conllevaría a suprimir la facultad que se tiene para resolver los conflictos ante la jurisdicción ordinaria o extraordinaria competente, lo que corrobora aún más la improcedencia de la acción.

Dadas las premisas planteadas los amparos de la tutela impetrada serán negados, como quiera que, además de que no nos encontramos ante un perjuicio irremediable, como tampoco se demostró la vulneración de derecho fundamental alguno, el accionante no allegó elemento de juicio alguno que acredite que hubiese elevado petición ante la totalidad de los entes accionados solicitando el retiro del reporte negativo ante las centrales de riesgo, por ende no puede pretender que se accedan a sus pretensiones, en tanto este Despacho Judicial no puede inmiscuirse en trámites propios de los procesos administrativos y/o judiciales, toda vez que al interior de los mismos se surte un procedimiento legalmente establecido, que no puede ser violentado en sede de tutela, en tanto no se vislumbra una vulneración al derecho del debido proceso.

Adicionalmente, tampoco se acreditó que el accionante haya elevado solicitud a los operadores de datos, para efectos de corregir, aclarar, rectificar o actualizar los datos o la información que tienen sobre él. Aunado a que en las centrales de riesgo no figura el reporte negativo que aduce el accionante en la presente acción de tutela.

Sumado a ello, la ALCALDIA DE BARRANQUILLA – SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BARRANQUILLA - SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL dio respuesta favorable a lo solicitado por la parte accionante en el derecho de petición incoado, respecto del desembargo de unos dineros, lo cual le fue comunicado al BCSC mediante oficio datado 23 de noviembre de 2020.

En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D. C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: NEGAR** la ACCION DE TUTELA instaurada por el señor JUAN DAVID HERNANDEZ MARIÑO en contra de BANCO CAJA SOCIAL, SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BARRANQUILLA, ALCALDIA DE BARRANQUILLA y vinculados TRANSUNION, CIFIN, DATACREDITO, EXPERIAN, COMPUTEC S.A. y CIFIN ASOBANCARIA, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente fallo.

**SEGUNDO:** Contra la presente decisión procederá la impugnación por la vía jerárquica dentro de los tres (3) días siguientes al de su notificación. (Art.31 Decreto 2591 de 1.991).

**TERCERO:** Notifíquese la presente decisión a los intervinientes, por el medio más expedito.

**CUARTO:** Sí este fallo no fuere impugnado, transcurrido el término respectivo y en la oportunidad de que da cuenta el inciso segundo del Art.31 ejusdem, ENVÍESE EL EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION, PREVIA LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS.

**QUINTO:** De igual manera, proceda la secretaria a incluir la presente providencia en el Portal Web de la Rama Judicial - Estados Electrónicos.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**



**FRANCISCO ÁLVAREZ CORTÉS**  
Juez

Se les hace saber a las partes, que por la coyuntura de emergencia y para efecto del pleno ejercicio del debido proceso, en caso se querer impugnar la anterior decisión, la misma deberá ser enviada al correo institucional del juzgado (cmpl12bt@cendoj.ramajudicial.gov.co)